



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, tres de mayo dos mil veintitrés**

#### **22-191**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- Apelación  
Demandante: **IRENE ELVIRA ROJAS ALVAREZ**  
Demandado: **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**  
Radicado No.: 05001-31-05-003-2019-00632-01.  
Tema: ineficacia traslado y pensión vejez  
Decisión: **CONFIRMA PARCIALMENTE**

Link: [22-191 \(003-2019-00632\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARIA NANCY GARCIA GARCIA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las entidades llamadas a juicio contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia

Se reconoce personería a la Dra. MELANY NIEVES TAMAYO identificada con cédula de ciudadanía N° 1.037.628.974 y portadora de la Tarjeta Profesional 257.033 del C.S. de la J., en los términos de la sustitución de poder allegada por la Dra. ELIANA MORENO PEDROZA en calidad de representante legal de la firma Muñoz y Escruceria S.A.S., para que continúe representando los intereses de Colpensiones.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 013** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

- 1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**
- 1.1. LO PRETENDIDO**

Solicitó la demandante, que tras la declaratoria de **INEFICACIA** o subsidiariamente la **NULIDAD ABSOLUTA**, del traslado a la administradora del RAIS, se tenga como válidamente afiliada sin solución de continuidad al régimen de prima media con prestación definida, además que se le reconozca y pague a título de daños y perjuicios el retroactivo de la pensión de vejez a cargo de PORVENIR S.A. a partir de cuándo hubiese tenido derecho en el RPMD, es decir, 15 de febrero de 2018 (momento en el que reunió los requisitos de edad y semanas), administradora que además debía trasladar a COLPENSIONES todos y cada uno de los aportes efectuados y sin ningún tipo de descuento por cuota de administración, incluyendo la diferencia que existe entre los aportes de uno y otro régimen.

Igualmente pretende que se ordene a COLPENSIONES reconocer y pagar la mesada pensional desde la ejecutoria de la sentencia.

Además, solicita el reconocimiento de los intereses moratorios de artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o subsidiariamente la indexación de las condenas.

## **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- Que nació el 15 de febrero de 1961 y que a la fecha de la presentación de la demanda contaba con 58 años de edad.
- Que realizó cotizaciones al ISS desde el 19 de enero de 1995 hasta el 28 de febrero de 1997, completando un total de 751.14 semanas cotizadas.
- Que se trasladó a Porvenir S.A el día 20 de febrero de 1997, momento para el cual laboraba en la caja de compensación del Meta \_ COFREM. (enlisto la información suministrada por el asesor y de igual manera aquella no que fue proporcionada, relacionadas con las características de ambos regímenes)
- Que al 15 de marzo de 2018, había cotizado en Porvenir S.A un total de 1.029 semanas, que sumadas a las antes referidas ascienden a un total de 1.890 en toda la vida laboral.
- Que administrativamente solicitó a las demandadas el retorno al RPM, las cuales dieron una respuesta negativa al aducir que había superado la edad permitida para trasladarse.
- Que el 6 de marzo de 2018, le solicitó a Porvenir S.A. la proyección de su mesada pensional entre los 57 y 62 años, la que mediante oficio del día 15 de del mismo mes y año, allegó la proyección solicitada, según la cual a los 61 años obtendría del RAIS una mesada inferior a la que hubiese accedido a los 57 años de permanecer en Colpensiones (\$2.067.100 versus \$4.332.000).

- Que devengó un salario superior a la base que le ofrece el fondo privado.
- Que el 18 de mayo de 2018 le solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez bajo los postulados de la Ley 797 de 1993, dado que satisface los requisitos para acceder a la misma.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido.

Inicialmente se pronunció PORVENIR S.A, aduciendo que no le constaban los hechos referentes a la edad de la accionante, su relación con el ISS y las solicitudes realizadas a Colpensiones, referente a los hechos restantes mencionó que no eran ciertos. Por otro lado, afirmó que a la demandante se le brindó una debida asesoría al momento del traslado de régimen, suministrándole para ello una información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz respecto de las características del RAIS y su diferenciación con el RPM, por lo que no era cierto que se hubiera omitido el deber de información.

Por su parte COLPENSIONES aceptó la fecha de nacimiento de la actora, su afiliación al extinto ISS, el posterior traslado al RAIS, las semanas cotizadas en el RPM y las solicitudes que le fueron realizadas. Respecto a los demás indicó que no le constan por lo que debían ser probados.

### **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 25 de julio de 2022, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ que la AFP PORVENIR S.A. faltó a su obligación de dar información veraz, clara y oportuna a la accionante al momento del traslado al RAIS y a lo largo de toda la afiliación, que a la actora se le causó daño acceso real y efectivo al derecho a la seguridad social en pensiones. Así mismo DECLARÓ la INEFICACIA por inaplicación constitucional del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad de la demandante, la responsabilidad profesional de la AFP Porvenir S.A, que la actora seguía inmersa en el RPM, pero a cargo de la AFP Porvenir y absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones.

Como consecuencia ordenó a la AFP PORVENIR reconocer, liquidar y pagar la pensión de vejez al demandante durante el mes siguiente a la solicitud por escrito que este hiciere, bajo los términos RPM,

petición en la que la accionante también debería adjuntar certificado de retiro laboral y dentro de ese mismo plazo PORVENIR debía solicitar a COLPENSIONES el valor del cálculo actuarial pensional, con miras a subrogación pensional.

Indicó que Colpensiones en un plazo dos meses debía realizar el cálculo actuarial mencionado y presentárselo a Porvenir, quien a su vez lo pagaría al mes siguiente del recibo de dicho cálculo y que cuando Colpensiones recibiera la suma correspondiente, comenzara a pagar la pensión de vejez al demandante.

Finalmente condenó en costas a Porvenir S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$4.000.000 a favor de la actora.

Dentro del término concedido por la ley, las entidades accionadas interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR**

Comenzó por indicar que las AFP privadas realizan contratos de encargo fiduciario para que una entidad financiera administre recursos ajenos bajo unas precisas condiciones contractuales o legales, motivo por el cual las tres altas cortes de Colombia han indicado que las AFP del RAIS, realizan la actividad financiera de gestión fiduciaria y que estas no tienen una obligación de resultado, pues dicho resultado económico está atado al movimiento financiero de la economía, pero sí tienen una obligación de medio o instrumental denominada obligación de diligencia debida de buen consejo, que consiste en darle una información clara, completa y veraz a los afiliados al momento de trasladarse.

Mencionó que la obligación de diligencia debida de buen consejo quedó consagrada el Decreto 720 de 1994 en sus artículos 4 y 12, al igual que en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, observándose entonces que con anterioridad al año 2009 ya existía esta obligación.

Fue así como advirtió que conocido era el principio según el cual quien causara un daño con su acción u omisión debía repararlo, omisión que devenía del incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 720 de 1994, que contemplaba obligaciones del gestor fiduciario, debiendo asumir Porvenir las consecuencias dañosas, no así Colpensiones que era un tercero ajeno a ese acto jurídico, destacando además que la actividad financiera de la AFP era altamente onerosa, tornándose improcedente

simplemente ordenar el regreso automático a Colpensiones por esa falta al deber de información, pues realmente equivaldría a un enriquecimiento sin causa de la AFP dado el conglomerado económico al cual pertenecía, viéndose beneficiada de su propia negligencia o descuido, precisamente por eso algunas se allanaban, de ahí que debía retornar un cálculo actuarial que cubriera las diferencias en cuanto al reajuste, dejando indemne el derecho al mínimo vital de la afiliada, situación que se concordaba con lo normado en el art. 271 de la Ley 100 de 1993, referente a que la selección de régimen quedaba sin efecto pudiendo afiliarse a prima media por violentar la libertad de escogencia.

Recordó que existían principios jurídicos, que como parte del ordenamiento, fundaban el sistema normativo, destacando el de la eficacia de los derechos sociales fundamentales o ineficacia del acto jurídico que atentara contra este, explicando que era deber de cualquier autoridad, incluso judicial, proteger el acceso real y efectivo al mismo, entre ellos el derecho a la seguridad social en pensiones, por lo que de observarse que una persona había perdido la posibilidad real y efectiva de acceder a este derecho, esa autoridad debía garantizarlo, incluso de manera oficiosa, al ostentar el carácter de irrenunciable, inajenable e inherente al ser humano, claro está, si se acreditaba dicho perjuicio.

Estimó que PORVENIR a título de perjuicios debía pagar la pensión de vejez a la actora en los términos del régimen de prima media, hasta que pagara a COLPENSIONES un título pensional con el que pudiera continuar cubriendo la prestación, y así subrogarse en el pago de la misma.

## **2.2. RECURSO DE APELACIÓN**

### **2.2.1. PRESENTADO POR PORVENIR S.A.**

Solicita que sea revocada la sentencia proferida por el a quo y en su lugar se absuelva a Porvenir S.A.

Comenzó por indicar que Porvenir cumplió con el deber de información estipulado en la Ley 100 de 1993, para el año 1997 cuando la accionante se trasladó de régimen y que esto se podía evidenciar tanto en el formulario de afiliación como en el interrogatorio de parte, pues se entiende que la misma conocía como funcionaba el régimen y decidió continuar afiliada por más de 25 años al RAIS. Por otro lado, mencionó que la demandante se pudo devolver al RPM en cualquier momento mientras se encontrara dentro de los plazos exigidos en la ley, en ese sentido la AFP Porvenir no tendría ninguna responsabilidad, pues la actora no hizo uso de su derecho.

Igualmente se opuso al pago del cálculo actuarial con miras a la subrogación pensional. En este punto mencionó que la función principal de las AFP del RAIS era administrar los aportes de sus afiliados y

que el cálculo actuarial es para los empleadores no para los afiliados, situación que se estaría tergiversando y que no es posible aplicar en este caso.

Insiste que carece de fundamento legal la condena a través de la cual se le impone la obligación de reconocer la pensión de vejez en los términos de prima media, pues en la Ley 100 de 1993 se especifica que el único administrador de RPM es Colpensiones. Añade que la Corte Constitucional ha aclarado que en varias sentencias que los dos regímenes existentes son excluyentes, aunque coexisten, lo cual se encuentra estipulado en la sentencia SU-130 de 2013.

Por otro lado, adujo que la demandante no demostró el perjuicio alegado, pues no se aportó al proceso algún documento de un perito actuario que demostrara la afectación mentada en la diferencia de la mesada, además mencionó que existen perjuicios sin que puedan ser demostrados como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia al recordar que la existencia de los perjuicios no se presume, pues ningún caso, debe existir un nexo causal para que se pueda acreditar y así entonces, surge la acción de reparar.

Finalmente indicó que en la sentencia que refiere emanada de la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, se consideró que el juez en primera instancia extralimitó sus facultades dentro de un proceso de ineficacia.

### **2.2.2. APELACIÓN COLPENSIONES**

Comenzó por aclarar que si bien en el fallo se absolvía, lo cierto era que en últimas sería la entidad que asumiría toda la carga de la declaratoria de ineficacia, al ser la encargada de reconocer y pagar la prestación de vejez al demandante, razón por la cual su descontento iría enfocado en solicitar que se absolviera de todas las pretensiones, o en su defecto ordenar la devolución de todos los aportes efectuados por la demandante al RAIS, al igual que el retorno de los gastos de administración, debidamente indexados.

Que conforme lo expuesto en los alegatos, el retorno en cualquier tiempo al RPM faltando menos de 10 años para acceder al derecho pensión de vejez, debía realizarse atendiendo a las expectativas pensionales del afiliado y la sostenibilidad financiera del sistema como lo planteaba la C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010, a través de las cuales la Corte Constitucional, en materia de traslados, indicó que nadie podía resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados, de lo contrario se descapitalizaría el régimen solidario de prima media. Así mismo, dentro de

la aludida jurisprudencia la Corte recordó que el derecho a libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituía un derecho absoluto, de lo contrario se admitiría algunas excepciones que por su misma esencia conducirían una diversidad de trato. Pensamiento que en igual sentido se plasmó en otra sentencia, la T-489 de 2010, oportunidad en la que se señaló que una persona que estuviera a menos de 10 años de pensionarse, cuyos aportes no fueron hechos al régimen de prima media, descapitalizaría el sistema.

Que aunado a ello, también debía tenerse en cuenta la única excepción consagrada a la prohibición de retorno, estipulada en la SU-130 de 2013 en la cual la Corte Constitucional, de conformidad con el literal e) del art. 13 y art. 36 de la Ley 100 de 1993, únicamente le permitió a los afiliados con servicios cotizados por más de 15 años al 1º de abril de 1994, trasladarse en cualquier tiempo desde el RAIS al RPM sin perder los beneficios de prima media, advirtiendo que en el presente caso no nos encontramos con un afiliado que se ubicara en el supuesto planteado.

### **2.3. ALEGATOS**

Inicialmente se pronunció Colpensiones, reiterando los argumentos expuestos en su recurso de alzada, además solicitó que sea confirmada la absolución realizada en primera instancia y que a su vez no se declare la ineficacia del traslado de la actora y continúe inmersa en el RAIS, pues recalcó que no era procedente declarar la misma, ya que está, sería quien debería asumir la carga pensional de la demandante, lo que desconocería los intereses patrimoniales de terceros, que en este caso, tendrían alcance frente a los principios de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional. De igual manera mencionó, que en caso de ordenarse el retorno al RPM, debía de ordenarse a Porvenir devolver todos los aportes realizados por la accionante en los términos aludidos por la Corte Suprema de Justicia e incluyendo los gastos por administración, siendo estos debidamente indexados.

Por otro lado, Porvenir S.A. solicitó que se revoque en su integridad la sentencia de primera instancia y que sea absuelto de todas las pretensiones incoadas en su contra. También abordó asuntos como el derecho a la libre escogencia, la acreditación del deber de información, la nulidad, los reales efectos de la declaratoria de ineficacia, los valores que eventualmente le correspondería retornar, mencionando de este que no es procedente devolver los gastos de administración y de seguros, pues considero que debe de aplicarse la figura de restituciones mutuas y por último mencionó que imponer a esta AFP que indexe cualquier suma de dinero sería imponer una doble sanción.

### 3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo a lo planteado en los recurso de alzada, el problema jurídico consiste en determinar cuáles son los efectos jurídicos que genera el incumplimiento del deber de información, analizando no sólo si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, examinando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia, sino además establecer la viabilidad de la indemnización de perjuicios, analizando si se acreditó el daño, la responsabilidad de la AFP y el nexo causal, y a su vez si ello cimienta la procedencia del pago de un cálculo actuarial en los términos ordenados por el fallador, determinando además qué haberes le corresponde retornar a Porvenir S.A. y si tal entidad está encargada de asumir transitoriamente el pago de una pensión por vejez pero en los términos regulados para el régimen de prima media, o si por el contrario tal obligación recae en cabeza de Colpensiones, estableciéndose si se demostró su causación y derecho al disfrute.

No obstante, lo anterior, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

### 4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de*



*régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado**.* (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

| <b>Etapas acumulativas</b>   | <b>Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información</b>   | <b>Contenido mínimo y alcance del deber de información</b>  |
|--|--|---|
| Deber de información<br><br><b>ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE</b> | Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993<br>Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003<br>Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal | Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales   |
| Deber de información, asesoría y buen consejo                                  | Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009<br>Decreto 2241 de 2010  | Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo |
| Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.                 | Ley 1748 de 2014<br>Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015<br>Circular Externa n.º 016 de 2016  | Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.  |

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente 20 de febrero de 1997 cuando suscribió el formulario de vinculación a PORVENIR S.A. (fl 89 del archivo 08 expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por su empleador y la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración y el ofrecimiento de algunos beneficios, pero sin explicarle realmente como podía acceder a ellos.

Y es que expresamente la señora IRENE ELVIRA ROJAS ALVAREZ en el aludido interrogatorio expuso que es administradora y laboraba para la Secretaria de Educación del Municipio de Dosquebradas. Respecto a su traslado al RAIS rememoró que para esa época laboraba para la caja de compensación del Meta – COFREM, y que cuando se creó la Ley 100 de 1993 su empleador empezó a realizar reuniones masivas para sus trabajadores, en las cuales se ofrecía otro método de pensión, reuniones que eran desarrolladas por los asesores de PORVENIR en las cuales se les mencionaba que allí su pensión estaría segura, afirmando que sus recursos no procedían del Estado y que contaban con gran apalancamiento financiero; además aseveraban que así como al Seguro Social se le había retirado su servicio de salud, de la misma manera se le quitaría la prestación de pensión y el ISS se acabaría. Adujo que los asesores sólo explicaron que el dinero de las cotizaciones iría a una cuenta personal, la cual generarían unos rendimientos y por último se le indicó la edad y las semanas requeridas para obtener su jubilación; que no se le dio a conocer los requisitos para obtener una pensión anticipada, ni su derecho a retractarse sobre su decisión, pero aclaró que, en su poco conocimiento en el tema de pensiones, confió siempre en el RAIS y en sus rendimientos. Que se enteró hace poco de su grave situación pensional, cuando sus compañeros le dijeron que era mejor pensionarse con Colpensiones, lo que le creó la duda y que por este motivo empezó a buscar información en la norma, enterándose que era más favorable pensionarse por RPM que por el RAIS, aspecto que corroboró cuando solicitó una proyección pensional ante Porvenir en la cual le dijeron cuanto sería su pensión en ambos regímenes.

Igualmente se escuchó la versión de la representante legal de Porvenir S.A., quien centró su exposición en lo atinente a la capacitación de sus asesores, precisando que de manera trimestral se evalúa su conocimiento y se realiza una retroalimentación.

Destáquese en este punto que la accionante NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, aunque lo indicado por la demandante pudiese dejar entrever cierta información suministrada al momento suscribir el formulario de vinculación al RAIS, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la

versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Bajo este contexto, de acuerdo a los razonamientos que preceden, NO es dable acoger la postura de Colpensiones en el recurso de alzada, asunto replicado en los alegatos presentados en esta instancia, pues aunque ciertamente la demandante sobrepasa los 47 años para efectos de solicitar su retorno a prima media, lo que aquí se examina es un asunto totalmente disímil, en donde ante la no acreditación del cumplimiento del deber de información, se declara ineficaz el traslado, y como nunca existió se acude a una especie de ficción legal entendiéndose que la persona permaneció en el régimen anterior sin solución de continuidad, en los términos del literal b) del art. 13 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 271 de ese mismo estatuto.

Tampoco interesa a la Sala los parámetros advertidos por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-062 de 2010, según la cual, al igual que en la SU-130 de 2013, sólo un cúmulo de personas tenía la posibilidad de retornar a prima media en cualquier tiempo al ser beneficiarios del régimen de transición, pero en virtud de la densidad. No obstante, aunque ello es cierto, nada tiene que ver ese razonamiento con el tema que hoy nos convoca, donde con apoyo a lo dispuesto en el art. 271 de la Ley 100 de 1993, la asegurada busca obtener la consecuencia jurídica que allí se dispone, cuando, como en este caso, no se acredita el cumplimiento del deber de información para el momento en que se trasladó al RAIS, tornándose ineficaz dicho acto

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto, es decir, en cuanto a la declaratoria de ineficacia, NO así los efectos que de ello derivó el juez.

Y es que aquel considera que la afiliada verá truncado su derecho a disfrutar de una prestación en un monto superior, dado que habría una eventual reducción en la pensión por vejez que recibiría de permanecer en el RAIS, en contraste con aquella ofrecida por el régimen de prima media.

No obstante, al margen de que por sí sólo eventualmente ello pudiese o no acarrear la indemnización de un perjuicio, lo cierto es que NO hay prueba que soporte la veracidad de tal aseveración, ni siquiera un cálculo a título ilustrativo, en contraste con lo que mal o bien, se identifica en los anexos de la demanda respecto al eventual monto que en un futuro percibiría en dicho fondo, ello sin miramientos a la precisión que pudiese tener un cálculo dado los errores en el establecimiento y/o cuantificación del IBL de cara a las cotizaciones efectuadas no sólo en el transcurso de la demanda, sino además con posterioridad a la sentencia que, de existir, afectarían cualquier cuantificación primigenia.

Aunado a lo anterior, habrá de señalarse que, en parte alguna, se acreditó que la administradora del RAIS hubiese brindado una errada información a la actora al momento de afiliarse, siendo carga de quien aduce un perjuicio, demostrar no sólo su existencia, sino que el mismo está ligado a tal actuar, es decir, ese nexo de causalidad, pues aunque quisiese asimilarse el daño al menoscabo en la tasa de remplazo, ello no releva de la actividad probatoria que en tal sentido se debe desplegar, actividad que precisamente NO ejecutó.

Y es que la ineficacia aquí declarada, no deviene de tal hecho, es decir, del actuar negligente de la entidad, ni de que se hubiese configurado un error de hecho en la naturaleza del acto o en la identidad de la cosa como vicio en el consentimiento, tal ineficacia nace de la omisión de la AFP en cuanto a no cumplir la carga de la prueba que el precedente judicial ha radicado en cabeza suya, es decir, se cimienta en el hecho de que el fondo no demostró la calidad de la asesoría que en su momento brindó a la afiliada.

Así las cosas, si se desconocen los pormenores de la misma, no puede tildarse de indebida o irregular, por lo que el eventual perjuicio que alega la peticionaria, partiendo de la idea que se hubiese demostrado un daño, no puede indefectiblemente desprenderse de tal asesoría en la que la demandante decidió trasladarse de régimen, asesoría cuyo contenido integral se desconoce, pues lo dicho por la accionante en el interrogatorio de parte absuelto, tiene como finalidad provocar una confesión, no acreditar un hecho.

He ahí un primer aspecto que daría al traste con la posibilidad de que se resarciera algún perjuicio.

Aunado a ello, aunque tal tesis no fuera de recibo, a igual conclusión llegaría esta Magistratura.

Y es que realmente, aunque pudiesen resultar interesantes los planteamientos del a quo, lo cierto es que son otras las consecuencias que nuestro órgano de cierre ha derivado en este tipo de asuntos, el que propende por la declaratoria de ineficacia junto con el retorno de ciertos haberes como más adelante se pasará a explicar, de ahí que siguiendo este precedente consecuencialmente se entienda que la persona permanece en el régimen primigenio, siendo Colpensiones y no otra entidad la encargada de asumir el reconocimiento integral de la futura prestación por vejez en caso de acreditarse el cumplimiento de los requisitos que contempla la ley.

Y es que la aludida ineficacia realmente implica es que la administradora del RAIS accionada, traslade a COLPENSIONES **todos** los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, en los términos

referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, de lo contrario Colpensiones no estaría recibiendo la totalidad del dinero que se debe retornar conforme el claro el precedente sentado por nuestro órgano de cierre, punto en el que se **ADICIONARÁ** la decisión adoptada por el a quo, quien tras exponer sus razones, ordenó a **PORVENIR** devolver cualquier valor que hubiese ingresado a la cuenta de ahorro individual de la demandante, contexto bajo el cual dicha orden sólo incluiría el retorno de cotizaciones y rendimientos, más NO la totalidad de los ítems dado que también comprende los componentes de los gastos de administración.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir,

cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.



Respecto a la **INDEXACIÓN** de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente ADICIONAR el fallo toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones debidamente indexado por parte de Porvenir S.A. respecto del lapso que permaneció en esta, teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula:  $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$ . Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltese las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021<sup>1</sup>, al momento de cumplirse la orden impartida, la administradora del RAIS accionada deberá discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados.

En tal sentido, deberá REVOCARSE la orden del fallador en cuanto a la declaratoria de causación de un daño por parte de Porvenir, consecuencialmente todo lo atinente al pago del cálculo actuarial/título pensional a título de indemnización por perjuicios y la prestación por vejez.

## **PENSIÓN VEJEZ A CARGO DE COLPENSIONES Y RETROACTIVO PENSIONAL**

Al entenderse que un afiliado permaneció sin solución de continuidad en el régimen de prima media, el análisis de procedencia de la prestación habría de hacerse bajo los lineamientos previstos en la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, que exige en el caso de las mujeres, acreditar que cumplió 57 años y que alcanzó a cotizar al régimen pensional más de las 1.300 semanas.

---

<sup>1</sup> Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

La demandante aduce satisfacer ambos requisitos y allega un reporte de Porvenir en el que se certifica un total de 2.057 semanas cotizadas al sistema a octubre de 2020 (fl.96 archivo 08 del expediente digital), data para la cual tenía 59 años, dado que según se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía, nació el 15 de febrero de 1961 (fl. 2 archivo 02 del expediente digital), aspecto que no es controvertido por las entidades llamadas a juicio.

Ahora, conforme se aprecia en el libelo genitor, a juicio de la parte actora, debe concederse el retroactivo pensional que estima causado desde el día 15 de febrero de 2018 cuando cumplió 57 años, día a partir del cual *hubiere tenido derecho en el régimen de prima media con prestación definida*, y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, pues NO otra cosa se podría interpretar dado que a partir de ahí solicita que Colpensiones reconozca la prestación.

En otras palabras, pretende que el retroactivo lo pague Porvenir en virtud del engaño que predica y así resarza el perjuicio, especificando que en ello consiste el daño. Intrínsecamente acepta que es conocedora de que las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la causación, afectan el disfrute. Y es que si nos remitimos a la información de la Historia Laboral que obra a folios 141 del archivo 08 del expediente digital, se aprecian aportes hasta julio de 2021, no porque se trate de su última cotización sino porque fue expedida en data cercana a tal fecha, de ahí que ningún otro pago podría visualizarse. Aunado a ello, al absolver interrogatorio de parte en la audiencia que se llevó a cabo en julio de 2022, la accionante adujo que aún se encontraba laborando y cotizando.

No obstante, aunque las pretensiones de la actora se encaminan a lograr una especie de reconocimiento de la pensión de vejez desde la causación, claro está, a título de resarcimiento de perjuicio, encuentra la Sala que realmente las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha en que cumplió 57 años, es decir, 15 de febrero de 2018, afectarían dicha posibilidad, pues **en su condición de empleada pública, de tener derecho a la pensión por vejez, sólo es dable percibirla una vez se retire del cargo.**

Adujo la demandante en el interrogatorio absuelto que es administradora y laboraba para la Secretaria de Educación del Municipio de Dosquebradas.

Dicha información resulta coincidente con el último empleador que se reporta en la Historia Laboral expedida por Porvenir, entidad de derecho público que efectúa aportes a favor de la aquí accionante desde enero del año 2002, razón por la cual, evidentemente, aquella es empleada pública.

Quiere ello decir, de un lado, que se requiere su retiro para percibir una eventual mesada pensional, y de otro lado, que NO es posible emitir un pronunciamiento frente a la procedencia o no de la pensión de vejez, toda vez que esta Magistratura carece de competencia para ello, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104-4 del CPACA, *la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo en los que estén involucrados las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 4. Los relativos a la relación legal reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público, como en este caso.*

A dicho la Sala Disciplinaria del Consejo Superior al dirimir conflictos negativos de competencia sobre el tema, que el conocimiento de los procesos tendiente a obtener la ineficacia o invalidez del traslado de régimen corresponde a la justicia ordinaria laboral, al ser el administrador de los aportes un fondo privado; pero como declarada la ineficacia se activa automáticamente la afiliación a COLPENSIONES, no es competencia de esa jurisdicción definir lo atinente al derecho pensional al satisfacerse los requisitos del artículo 104 del CPACA.

Sobre el particular es del caso traer a colación lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia T-064 de 2016 cuando dijo:

“...la determinación adecuada de la jurisdicción que ha de resolver un litigio es un presupuesto de vertebral relevancia, en tanto de allí emana la validez misma del proceso, toda vez que un vicio como la falta de jurisdicción conlleva a que las actuaciones procesales resulten afectadas por una nulidad que no es susceptible de saneamiento alguno. Y agrega la Corporación: En esa medida, para la autoridad judicial que advierta la presencia de semejante defecto, resulta obligatorio declarar el vicio detectado y adoptar las medidas tendientes a que el trámite sea renovado con estricto apego al debido proceso. De esa forma, el juez consigue legitimar la administración de justicia y concretar la eficacia de los derechos de las partes enfrentadas, materializando así los fines estatales que la Constitución ha trazado. Por el contrario, aquel juez que evada dicho imperativo, eludiendo las funciones que le atañen como director de la contienda, perpetuará la transgresión del debido proceso y avalará la perversión derivada de las decisiones dictadas tras un juicio enteramente antijurídico...”

Así las cosas, lo procedente es declarar la falta de competencia frente a dicha pretensión.

Bien podrá la parte, tras la ejecutoria de esta decisión, elevar la correspondiente reclamación ante Colpensiones, y si algo ha de controvertir respecto de tal prestación, discutir lo que a bien tenga ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA PARCIALMENTE** en cuanto a la declaratoria de ineficacia, **adicionándola y revocándola** en los aspectos antes aludidos.

Sin costas en esta instancia, dado que todas las partes apelaron y tuvieron éxito parcial en el recurso, dado que, entre otros, su disenso se enfocó en los efectos de la declaratoria de ineficacia.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### DECIDE

**PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE** la sentencia proferida el 25 de julio de 2022 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **IRENE ELVIRA ROJAS ALVAREZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 21.239.578 contra **PORVENIR S.A. y COLPENSIONES**, en cuanto a la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS.

**SEGUNDO:** se **REVOCA** la declaratoria de causación de un daño por parte de **PORVENIR S.A.** y consecuentemente todo lo atinente al pago del cálculo actuarial o título pensional y mesada pensional a cargo de la AFP a título de indemnización por perjuicios.

**TERCERO:** se **ADICIONA** el fallo bajo el entendido que **PORVENIR S.A.** trasladará a **COLPENSIONES** todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, incluyendo también los tres ítems que componen los gastos de administración, es decir, costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, montos que serán debidamente **INDEXADOS** por dicha administrador del RAIS al momento del pago, oportunidad en la que además discriminará los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

**CUARTO:** se **declara la falta de competencia** para conocer de la pensión de vejez.

**QUINTO:** Sin costas en esta instancia

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Proceso:               | ORDINARIO LABORAL- apelación.       |
| Demandante:            | <b>IRENE ELVIRA ROJAS ALVAREZ</b>   |
| Demandados:            | <b>COLPENSIONES y PORVENIR S.A.</b> |
| Radicado No.:          | 05001-31-05-003-2019-00632-01.      |
| Tema:                  | ineficacia traslado y pensión vejez |
| Decisión:              | <b>CONFIRMA PARCIALMENTE</b>        |
| Fecha de la sentencia: | <b>03/05/2023</b>                   |

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 04/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario